



Debate

Notas para la historia de un desencuentro en la revuelta. Sobre alianzas sociales, izquierdas y una década de luchas sociales. Chile, 2011 – 2020

Luis Thielemann H.
Historiador y académico
Universidad Finis Terrae
lthielemann@uft.cl

Resumen: La revuelta de octubre de 2019 se pone en perspectiva histórica en este ensayo. Se propone que lejos de ser algún tipo de estallido sorpresa, es parte de un ciclo largo de protestas, que encuentra hito de inicio en 2011, y que expresa distintos grupos sociales en alianza para una crítica del orden neoliberal de la transición. El ensayo sostiene que dicha alianza se expresó de formas electorales y apuestas de izquierda y progresistas entre 2013 y 2017, pero que por diversas razones éstas no lograron –o no priorizaron– canalizar las demandas de las mayorías populares. La distancia entre nuevos partidos cada vez más identificados con un pequeño sector de las capas medias, con sus movimientos de origen y las críticas sociales que ayudaron a masificar entre las clases populares, se hicieron notorias en la revuelta de octubre pasado. Todas esas contradicciones estaban en la alianza social de las luchas sociales desde el comienzo de la década movilizadora, en 2011. Este ensayo repasa el desarrollo de la misma, entendiéndolo como una muestra tanto de las posibilidades como de los límites de una alianza de sectores medios y clases populares, de corte progresista, protagonistas en el siglo pasado, ahora en el siglo XXI.

Palabras Clave: Ciclo de protestas; revuelta; clases populares

Cómo citar este artículo: Thielemann, L. (2020). Notas para la historia de un desencuentro en la revuelta. Sobre alianzas sociales, izquierdas y una década de luchas sociales. Chile, 2011 – 2020. *Revista Némesis*, 16, 109-119.

Fecha de recepción: 12 de julio del 2020

Fecha de aceptación: 13 de agosto del 2020

Notas para la historia de un desencuentro en la revuelta. Sobre alianzas sociales, izquierdas y una década de luchas sociales. Chile, 2011 – 2020

El principal problema para pensar una historia que sitúe en el centro la experiencia y el devenir de las clases populares está en la perspectiva. Los hechos abundan, a veces incluso desbordan la memoria sobre lo reciente, y las clases propietarias y profesionales tienen además una enorme capacidad de ordenarlos en una narrativa protagonizada por ellos y sus instituciones, demarcada de principio a fin por sus destinos. Está el que dirá que lo de octubre 2019 fue un “estallido”, porque la historia que lo lleva hasta ahí tuvo calma y paz, hasta que todo explotó con las estaciones del metro en llamas, denotando en la palabra el carácter sorpresivo del mismo. Otros, recurriendo al ya canónico concepto de “ciclo de protestas” (Tarrow, 2004), podemos decir que lo que ocurrió fue una revuelta; un punto de ruptura, de rebelión, fruto de largos ciclos de enfrentamientos, agitación y movilizaciones de todo tipo. La revuelta de octubre, visto en la perspectiva de la historia de las luchas contra el neoliberalismo, comienza en 2011.

Lo que se presenta a continuación son apuntes para entender la forma social, las clases y alianzas que actuaron en toda la década pasada, sin ánimo de entrar académicamente al debate, sino que de proponer algunos puntos de vista para el estudio del período. Una observación desde la historia, que no desconoce y no busca reemplazar la amplia bibliografía que se ha producido sobre los hechos de 2011 y que se está produciendo sobre 2019, permite mirar el período, el ciclo como un momento de características propias. El ensayo que sigue plantea que el ciclo de protestas iniciado en 2011 responde a una alianza social de jóvenes de clases populares y jóvenes de sectores medios, basada en la crítica al orden neoliberal y de la Transición y ante el agotamiento de su oferta de movilidad social. Dicha alianza y su crítica al orden se fue expandiendo, activando y desarrollando a través de organizaciones, hacia otros grupos y subjetividades de masas. Las protestas de todo el ciclo 2011 – 2019 responden a similares sujetos sociales y similares discursos basados en su malestar social. Octubre de 2019, la revuelta, sería así un punto de llegada de esa larga lucha social. Pero, también, un punto de desencuentro de dicha alianza, ahora entre sus organizaciones y bases sociales de masas movilizadas, y los partidos de la nueva izquierda y nacidos de dicho ciclo de protestas. De 2011 nace una masificación de la protesta y también una cabeza política autónoma, pero ambos campos no llegaron a 2019 juntos. Más bien, la forma en que termina 2019, entre acuerdos de partidos para reformar y reprimir sin que de ello se distinga la nueva izquierda surgida de 2011, demuestra que los procesos hermanos de masificación social de la lucha y construcción de partidos basados en ella, vivían un profundo desencuentro.

Una nota metodológica antes de seguir. Si se ha preferido obviar la bibliografía respectiva a 2011, y muchos de los estudios sobre los movimientos siguientes, no es por negar la validez de la misma, sino porque hubiese significado abrir demasiados debates, imposibles de seguir. Por ende, lo que sigue debe considerarse un mero ensayo, un borrador de ideas para comenzar a interpretar el ciclo 2011 – 2019, y por ningún motivo algo así como un análisis histórico de valor científico.

El ciclo comienza en 2011. No es una situación descrita por aquella figura, solo posible desde un extranjero a los movimientos, del “despertar”. Tampoco estos ciclos “nacen”, sino que cambian de fase. Los disturbios y movilizaciones sociales de 2011 son parte de otros ciclos, puntos de llegada, contacto o bifurcación de procesos iniciados años antes, con el siglo XXI. Son procesos fragmentarios en su propia parcialidad, o imaginados en el universal de un país prometido. Todos expresan el fin, generacional o por peso de la estructura, de los cerrojos a la exteriorización colectiva y frontal del malestar. Cerrojos tanto del terror de Estado como del bienestar material del auge económico, que marcaron el ciclo dictatorial y la Transición temprana (1973 - 1994). También, y ante la destrucción –metafórica o literal– de los sujetos populares del ciclo político desarrollista, comenzaron a asomar experiencias colectivas de lucha relativas a las contradicciones del capitalismo chileno actual. Un malestar de clases trabajadoras

que despegó luego de los años más duros de la crisis asiática, que coinciden con el cambio de siglo. Allí, los sectores más movilizados serán aquellos ligados a la economía exportadora de materias primas, como los portuarios, mineros y forestales. También emerge un cuestionamiento juvenil amplio, de aquellas generaciones que no sentían el peso del disciplinamiento militar ni el del agradecimiento a los rostros del retorno a los gobiernos civiles.

La subjetividad militante de los grupos que actuaron en 2011 tenía fresca la memoria de las amargas derrotas y sufridas victorias que se habían obtenido en distintos campos en años recientes. Las olvidadas primeras luchas de subcontratistas habían acompañado la frustrante foto de las manos levantadas del primer “Acuerdo Nacional” (entonces apellidado “por la calidad de la educación”) como método de resolver un conflicto social (el de estudiantes de 2006) sin sus protagonistas, como fue en 2007. Ese primer Acuerdo Nacional –y que terminó en la Ley General de Educación– fue un símbolo de lo que se sintió como una traición política de la Concertación en pos de los consensos con la derecha y los empresarios de la educación. Para toda una enorme franja de dirigentes y activistas, no solo del mundo de la educación, aquello fue visto como la elección de los políticos por mantener una democracia impermeable a las organizaciones sociales y, sobre todo, a colectivos sociales en lucha. Para peor, se entendió que todo aquello era un costo asumido en pos de asegurar la ganancia a los empresarios. Ese primer uso del acuerdo nacional como método de disolución de conflictos por arriba, es un hito fundante en la historicidad de las subjetividades que protagonizaron las luchas de la década pasada. En esa historicidad, la valoración unívoca que se hizo entonces al comienzo del ciclo, contrasta fuertemente con la diversa actitud asumida al finalizar la década. La imagen que resume toda esa rabia impotente entonces, es el mediático jarro de agua lanzado por una estudiante secundaria de base a la ministra de educación Mónica Jiménez. La misma estudiante, una semana antes del inicio de la revuelta de octubre de 2019, indicó en una entrevista a un medio estudiantil: “...en todos estos años, la rabia se ha cocinado y está la mierda hirviendo en la cabeza de todos” (Bello Público, 2019).

En general, 2011 marca una especie de agotamiento con reglas que son percibidas como desiguales. Nada nuevo, pero eran movimientos que hasta 2010 la Concertación resolvía con discursos progresistas por arriba y concesiones a sectores populares por la base, aunque cada vez con menos éxito. Desde ese año, gobernaba la derecha, con un histórico desconocimiento de las formas y dinámicas del conflicto social. Es decir, no solo se agota la capacidad de consenso del régimen, sino que sus gestores son inoperantes en las formas conocidas hasta entonces de producir dicho consenso.

Además, 2011 es como se nombra una serie de saltos cualitativos en el cuestionamiento de masas al neoliberalismo en Chile. El año comenzó con las protestas contra la amenaza gubernamental de cortar los subsidios al gas de uso doméstico en Magallanes. Estas protestas, ocurridas en enero y febrero, y que terminaron con varios heridos y dos muertas, expresaban actores y demandas bastante tradicionales, pero demostraron la débil capacidad del gobierno de responder a estos conflictos, que terminó perdiendo a uno de sus ministros más políticos –Rodrigo Álvarez– en el conflicto, así como cualquier rostro amable o dialogante de la derecha. En retrospectiva es posible afirmar que al ver la revuelta del gas en Magallanes por la prensa, activistas y militantes de todo tipo “olieron sangre” (Emol, 2011).

Entre marzo y junio de 2011, se realizaron protestas contra la creación de la represa Hidroaysén. Las convocatorias, a partir de mayo, desbordaron el clásico sector del ecologismo que se movilizaba por ese tipo de causas hasta entonces. Oficinistas y trabajadores del centro de Santiago se sumaron a algunos estudiantes en los primeros disturbios masivos protagonizados por trabajadores santiaguinos en muchos años. Durante semanas, principalmente los viernes, una inmensa columna compuesta en su mayoría por trabajadores jóvenes, se movilizó en contra del proyecto hidroeléctrico (Thielemann, 2011). Pero más allá de la demanda oficial, en los gritos, destacaba un rechazo al gobierno de Sebastián Piñera, y a través de él y su historia, a la cooptación empresarial de la política.

El carácter social más popular de las protestas de Magallanes en el verano, y en Santiago en el otoño, más la mencionada desconfianza de las militancias y activistas que quedó después del primer acuerdo nacional de 2007, y junto a una debilidad de la derecha en el gobierno para procesar los conflictos políticos desde el Estado, son elementos que quedan ensombrecidos por el protagonismo juvenil y mesocrático de las movilizaciones estudiantiles que se abren en mayo de 2011. Pero vistos en el marco del conflictivo ciclo de la década, ayudan mucho a explicar la lucha de clases base del proceso político social iniciado desde entonces, así como también las formas propias en que se procesó la revuelta de octubre de 2019.

II

Sin duda, el movimiento de protesta más importante del ciclo fue el movimiento estudiantil. No solo por su volumen de masas movilizadas y extensión regional a prácticamente todas las grandes y medianas ciudades del país, sino porque sirvió de síntesis de procesos anteriores, acelerador de otros movimientos (como el sindicalismo), y base de militancias y activistas para los principales movimientos de la segunda mitad de la década. Es aquello lo que más nos interesa destacar del movimiento estudiantil de 2011, cómo en la trayectoria de miles de jóvenes se hace visible desde ese año un ascenso cualitativo en la impugnación al neoliberalismo en Chile.

Existe una ya inmensa y creciente bibliografía sobre las luchas sociales de 2011, y no me es posible realizar una síntesis de sus hallazgos, pues queda fuera de mi capacidad interpretativa. En lo que en general coinciden es en la masividad inédita en décadas de la lucha social de aquel año. De la misma forma, que dicha masividad estaba dada por la amplitud de sectores de la educación terciaria y secundaria movilizada. La movilización se inició, en paralelo a las luchas contra Hidroaysén (y con epicentros a escasas cuadras de distancia en Santiago), en la Universidad Central, plantel mayormente de estudiantes de familias trabajadoras. Allí, la lucha contra la venta de la universidad a una empresa ligada a la Democracia Cristiana fue resistida con tomas y disturbios por un par de meses, marcando un tono más áspero –proletario– a la amplitud social y al repertorio de acciones que tendría el 2011 más allá de las grandes universidades de las clases medias y ricas.

Las luchas principales comenzaron en mayo, y para julio ya era el movimiento estudiantil más grande –en número de movilizados– de la historia del país. Marchas casi todas las semanas en el centro de Santiago y de las principales ciudades del país, con cientos de miles de estudiantes en las calles a la vez, universidades tomadas y un estado de tensión permanente, marcaron el año hasta por lo menos octubre, y en muchos lugares hasta inicios de 2012. Los principales hechos fueron una recordada noche de disturbios, principalmente en los centros de las ciudades y en los barrios de sectores medios, el 4 de agosto. Luego, un paro nacional de dos días, en que se movilizaron importantes sectores de trabajadores, y en cuya primera noche fue asesinado en Macul, Santiago, por Carabineros el menor de catorce años, Manuel Gutiérrez.

Es posible elevar la hipótesis –para nada novedosa– según la cual es la deuda, masificada hacia las universidades privadas y también hacia los estudiantes considerados de grupos medios, por el CAE desde 2006, está en la base de tal amplitud del movimiento estudiantil de la década pasada. Mientras las luchas del ciclo anterior de lucha estudiantil (1997 - 2005) estuvieron determinadas por el déficit del fondo estatal de préstamos para estudiantes de universidades del sistema público; el CAE, común a todas las universidades reconocidas en el país, era una experiencia común a los cientos de miles de estudiantes más pobres del país. No solo eso, la contraparte de un préstamo de reglas de cobranza violentísimas amparado por el Estado, era una transferencia inmensa de recursos estatales a la banca privada que administraba el crédito; y aquello fue agitado de manera creciente en los campus por la militancia y el activismo estudiantil. En lo que nos importa, el CAE no solo le dio una liga a la amplitud social de

2011, sino además proporcionó un foco de rabia permanente a través de la cobranza de la deuda más allá de los años de educación superior. En abril de 2019, una carta firmada por personas que habían sido dirigentes estudiantiles de 2005 hasta ese año, solicitaba el fin del sistema y la condonación de la deuda (Mostrador, 2019). En octubre de 2019, aquella fue una de las demandas más extendidas en las barricadas de la revuelta.

La deuda se volvió un lenguaje nacional que lograba unificar distintos grupos sociales en una trinchera común. Como toda unidad, contenía contradicciones suturadas contingentemente por la lucha, principalmente entre los distintos grupos sociales dentro del movimiento estudiantil. Más todavía por la forma del conflicto, delineada por la existencia de un bando con poder de movilización de masas, pero sin representación en las instituciones políticas del Estado, de las que además desconfiaba. Esto subordinaba dichas contradicciones a la estrategia común del campo educacional, primero; y a la de las organizaciones de izquierda, después, que rápidamente vieron en la movilización la posibilidad de acumular tal capital para sus partidos. Toda esa diversidad de grupos sociales unificados en el conflicto, y entre ellos las organizaciones de izquierda estudiantil en sus distintos matices, hacen visible el origen contradictorio del ciclo de protestas en 2011. En la lucha de clases, es posible observarlo como una alianza de grupos que todavía tenían algo que perder, dirigiendo a los que creían que todavía tenían algo que ganar. Era la alianza entre jóvenes –y sus familias– de clases trabajadoras que descubrían las trabas y, en la práctica, la imposibilidad endeudada de la movilidad social en la educación superior de masas; y los sectores medios que no podían reproducirse en el funcionariado estatal y gerencial a pesar de toda deuda e inversión en credenciales. La dirección de dicha alianza, por capacidad de organización y acceso a recursos, por supuesto que la tuvieron los sectores medios profesionales desde un comienzo. Esto no es novedad. Lo interesante de la alianza es que se fundó en la lucha de masas, la cual por obvias razones le daba un peso político inédito a jóvenes dirigentes y bases militantes de familias de clase trabajadora. El enemigo común también unificaba. Éste se mostraba como una burocracia de políticos, dijimos, crecientemente inepta, sobreideologizadamente neoliberal, disciplinada por partidos y empresarios (y desde 2010, partidos de empresarios), y violentamente autoritaria. Visto desde abajo, el segundo gobierno de Bachelet desde 2014 solo vino a demostrar que dicho enemigo era también poderoso en la Concertación.

Como marca del ciclo que inició, 2011 terminó sin ningún cambio de importancia. No hubo triunfo alguno en las principales demandas, aunque sí en luchas locales. De esta forma, a la par que la demanda por la educación gratuita fue creciendo en aceptación y centralidad política por distintos sectores, por la base enormes sectores aprendían a luchar. A partir de 2011, los protagonistas de luchas en universidades privadas como la de la U. Central, se dieron el trabajo sistemático de formar dirigentes y asistir en la construcción de organizaciones de estudiantes en otras instituciones carentes de ellas. El conflicto se volvió normalidad desde entonces en las universidades, y una reforma fragmentada, a ras de suelo, diseminada en todo Chile, fue ocurriendo sin detenerse por una década. No solo se expandió entre estudiantes, sino también hacia otros movimientos, los egresados se convirtieron en frescos sindicalistas de trabajadores precarios, mientras que otros dinamizaban luchas socioambientales por todo el país. Una enorme mayoría de mujeres educadas y formadas en las luchas, comenzaron a politizar su propia existencia dentro y fuera de los campus, levantando los primeros actos de lo que sería el nuevo movimiento feminista del siglo XXI. En fin, las luchas estudiantiles de 2011 y el movimiento estudiantil de masas de ese año, expresaron desde entonces la punta más radical de la crítica popular al neoliberalismo-transición. Fueron una escuela de luchadores sociales que se desbordó hacia el resto de la sociedad, activando nuevos procesos y dinamizando los ya en movimiento. Desde 2011 se inaugura una nueva actitud en miles de militantes y activistas de clases medias y trabajadoras, definida por la disposición al enfrentamiento permanente y no contingente, sino estratégico.

III

La alianza social de 2011 mostró sus dientes en innumerables luchas sociales desde entonces. La crítica al CAE se demostró multiuso como explicación de diversas formas de explotación y expolio en Chile. Por una parte, la deuda como método de tributación directa de las clases populares a la banca, por otro, su origen como acuerdo político entre los políticos de todo signo, empresarios de la educación y los banqueros. El negocio que descansaba sobre los trabajadores y que había sido organizado por la connivencia entre la política y las clases propietarias, explicaba lo que desde entonces y de forma creciente se entendió como el problema base del malestar en las áreas que fuese. El lucro era la palabra que resumía aquello, y su negación la solución que crecía. Así, la satanización de la ganancia, originaria del movimiento estudiantil de 2006, en la consigna “no al lucro”, permitió construir una posición de contestación similar a la privatización de los hospitales, el colapso del sistema de salud en los inviernos, las pensiones de hambre y las AFP, el trabajo precario, las colusiones de precios de bienes y servicios, y un largo etcétera de puntos de contradicción del orden neoliberal.

La alianza social formada por los estudiantes de familias trabajadoras e inscritos en instituciones construidas con ese carácter social, y estudiantes de las familias de capas medias profesionales y ricas que veían en la lucha social la posibilidad de restaurar su reproducción como administradores del modelo, agrupadas en organizaciones de izquierda, comenzaron a desbordar al mismo movimiento estudiantil. Entre 2011 y 2013 se dieron innumerables debates en las direcciones de la Confech sobre qué y cómo hacer aquello. En dicha discusión estratégica, principalmente las izquierdas comenzaron a fortalecer la construcción de conflictos y organizaciones ad-hoc en lugares de trabajo precario, entre sectores laborales de la minería y la extracción en general. Los acercamientos no produjeron un fuerte movimiento de trabajadores, pero tendieron a fortalecer algunos procesos, y dieron a ciertas fechas –como el 11 de julio, aniversario de la nacionalización del cobre durante el gobierno de Allende, en 1971– una masividad nueva, como ocurrió en 2012 con un paro productivo convocado con fuerte apoyo de la Confech.

La campaña presidencial de 2013 expresó también dicha alianza, y parte importante de sus militantes y activistas se incorporaron a ella tras la candidatura de Michelle Bachelet. Esto especialmente desde los militantes comunistas y el recién creado partido Revolución Democrática, formada por los rostros más “moderados” de la movilización de 2011. Este último, además, fue candidato a diputado ese mismo año, junto a otros exdirigentes. Nos referiremos a ello más adelante. Lo que importa destacar acá es que esa alianza social, movilizadora principalmente desde el movimiento estudiantil y con una importante dirección de capas medias profesionales, fue capaz de centralizar la política sobre sus demandas y críticas.

Tal vez el gremio profesional en que la alianza social de 2011 encuentra más firmes suturas es entre los profesores. El gremio docente llevaba años de una fuerte burocratización, eso tras una importante actividad huelguística en los noventa, bajo conducción comunista. En el siglo XXI había perdido capacidad de movilización y sus bases estaban principalmente entre los jubilados. En los paros docentes de 2014 y 2015, en cambio, emergió una nueva franja de dirigentes y activistas, en buena mayoría militantes de organizaciones de izquierda, y casi todos con un pasado activo en el movimiento estudiantil. Esto fue especialmente notorio en lugares como Santiago y el Gran Concepción, en donde años más tardes los líderes jóvenes de aquellas luchas se convirtieron en dirigentes regionales, comunales o nacionales del Colegio de Profesores, la principal organización gremial docente del país. La precaria situación docente presentaba el ejemplo concreto de la descomposición de las viejas seguridades de las capas medias en una de sus profesiones más características. Por otra parte, es uno de los sectores de las capas medias profesionales más directamente vinculados al campo popular, y en específico a los estudiantes de las familias trabajadoras. Así, en gran número han sido parte fundamental de la formación y sostenimiento de la alianza social, pero a pesar de ello no parecen ser un actor dirigente de la misma en su expresión

política. Desde entonces, la importante presencia de la nueva izquierda radical –especialmente nutrida en, o surgida de, 2011– en el gremio docente y en sus sectores más movilizados, contrasta con la poca incidencia gremial en las definiciones de prioridades políticas de los partidos y parlamentarios de aquella izquierda (Thielemann & Delgado, 2016).

Distinta es la situación del feminismo, que también expresaba una fuerte alianza social popular y de capas medias. En un ascenso fuerte desde los campus, con el hito de la toma de la Catedral de Santiago en 2013, y un estallido de masas en mayo de 2018, pasaron a marcar la urgencia del paso de los partidos y movimientos de la nueva izquierda radical, y más allá. La movilización feminista, además, va a darle bríos inesperados a la masificación de la alianza de 2011. En su propio proceso todavía en marcha, convocó a la política a una enorme mayoría de mujeres populares, bajo banderas parciales permanentemente excluidas de la política (como el aborto y los abusos sexuales), a la vez que abría la política hacia el debate sobre la reproducción material de la vida, espacio preferencial de explotación de mujeres. El feminismo logró poner en diálogo desde y dentro de la diferencia de género toda una serie de males-tares críticos, como la precariedad de los trabajos feminizados, la negación del valor en la producción de afectos y la reproducción material de la vida, la masificación de la deuda como la imposibilidad de completar el salario necesario para la vida, la vulnerabilidad de la infancia y otros sujetos debilitados estructuralmente, etc. En ese sentido, el ataque a lo que se identificó masivamente como orden patriarcal, abarcaba y daba unidad ante y para importantes franjas de la sociedad hasta entonces subalternas incluso en sus propias organizaciones y trabajos, de contradicciones del desarrollo neoliberal que no habían sido perspectivadas de esa forma. La irrupción del feminismo de masas obligó a ello. Como se dijo entonces:

De ahí el hecho de que, más que un producto de la modernización de mercado acontecida los últimos veinte años en ese país, el movimiento feminista chileno se plantea a sí mismo como una instancia de reclamo y reconstrucción de los derechos sociales perdidos, así como de refundación de las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la izquierda chilena a fin de converger en una acción transformadora conjunta (Olmedo, 2019, p. 160).

Un tercer gran movimiento que en estos años levantó una impugnación de masas al orden neoliberal, y de cuyos activistas una buena parte venía de las militancias universitarias, fue No+AFP. Si bien es un colectivo impulsado desde ciertos activistas sindicales, originalmente del sector de trabajadores bancarios de donde es su referente más conocido, Luis Mesina, y de otros sindicatos de servicios públicos, no comparten generacionalmente con los grupos de 2011; es en ese universo donde más fuerzas de activistas y aliados organizados consiguió el movimiento de trabajadores. Este movimiento llegó a movilizar millones de personas en algunas jornadas desde 2014 en adelante, y plebiscitó sus demandas y propuestas convocando a más de un millón de votantes. A través de sus asambleas, foros, panfletos y jornadas de activismo y movilización, se desplegó con mayor fuerza la crítica política desarrollada en los diálogos entre movimientos, en especial desde 2011. Las AFP han funcionado, en el sentido de cómo creció la alianza social de 2011, como una especie de CAE a la inversa, pues permitió unificar en torno a la desposesión de los ahorros de trabajadores que terminaba dañando a los más viejos, un inmenso malestar de trabajadores de otras generaciones. No+AFP ha carecido hasta ahora de una estrategia de llegada política, pero en la década de la que hacemos notas para su balance, logró producir una referencia de síntesis del malestar social, una crítica específica a una política fundada en una necesidad social, pero que se utilizaba apenas solapadamente para el negociado privado, y en detrimento de su función original, en este caso las pensiones, como metáfora de todo lo que se considera malo en el Chile actual. No+AFP, de 2014 al presente, con un momento alto en el plebiscito de 2017, consistió en un movimiento pre-revuelta de trabajadores inorgánicos, aunque también de distintos sindicatos en sus crecimientos particulares. Su expansión masiva como expresión de crítica, pero también su imposibilidad de convertirse en un movimiento de trabajadores afiatado y organizado

a nivel de masas y con capacidad de subordinar a los partidos de izquierda, dan cuenta de las formas en que la alianza social movilizada en la década pasada llegó a octubre de 2019, y también de cómo aquello fue procesado.

IV

Desde el mismo proceso descrito en los puntos anteriores surge un movimiento con dinámicas propias. No se trata de una escisión o una diferenciación, sino más bien la activación de la inteligencia política sobre la experiencia de los años anteriores a las luchas de 2011. Desde 2012, cuando se fundó Revolución Democrática con quien recién habían dejado de ser presidente de la FEUC a la cabeza, Giorgio Jackson; la apuesta de un sector creciente de la alianza social de 2011 fue saltar a la política y asumir representación propia de sus ideas. Esto demostraba un desafío tanto a la Concertación, quién hasta entonces tenía el monopolio político del progresismo, como al PC que tenía similar condición en la izquierda radical. A RD le siguió el paso veloz Izquierda Autónoma, que controlaba la FECh. Este último grupo, desde 2012, le dio forma a una dualidad política que funcionó un par de años como transición entre lo social y lo político. Por una parte, se mantenía la organización política mayoritariamente estudiantil, por otra, se construía una “fundación” sin fines de lucro, con un aura de construcción intelectual, pero que también ejercía roles de dirección política “adulta” sobre el movimiento político. En general, ya fuera creando fundaciones, declarando la autonomía de la organización estudiantil respecto del partido (como hizo RD sobre sus bases estudiantiles), o bien operando desde direcciones más “secretas” o no formalmente reconocidas por los colectivos políticos (como fue el caso de los libertarios y también otros grupos); se dio el salto a la política institucional desde las luchas de 2011 y con miras, en un primer paso, hacia las elecciones generales de 2013.

El “egreso” de la política universitaria hacia la vida adulta de los militantes y activistas de 2011 no pudo resolver el viejo problema de las luchas sociales de proyectarse en tanto tales a la política. Es más, buscando superarlo terminó por confirmarlo, al crear estructuras específicamente políticas separadas de las organizaciones ancladas a la lucha social estudiantil. El apresurado decreto de éstas últimas como incapaces de ejecutar política “nacional”, argumentado como la necesidad de superar su parcialidad propia de un movimiento en lucha, construyendo instrumentos que buscasen la representación universal de la sociedad, bajo ideas de izquierda, no era una mera diferencia táctica. Era una disputa estratégica con bases ideológicas. Desde que a fines de 2013 se confirmó la primera ruptura del dique de contención social del parlamento, cuando distintos exdirigentes estudiantiles (del PC, de RD y de iA) logran ser electos, aunque en su mayoría dentro de la coalición que llevó a Bachelet a la presidencia en 2014 y que era una alianza de la Concertación con el PC. Era el comienzo del fin de la unidad de la centroizquierda que, por diversas razones, se mantuvo sin competidores y con capacidad de contener y arrinconar toda disidencia por la izquierda desde 1989. De ahí en más, el camino de formación del Frente Amplio y de descomposición acelerada de la vieja Concertación, es una historia que mantiene curso y, a estas alturas, es un proceso casi terminado.

Lo que nos interesa destacar acá es el devenir de la alianza social movilizada y en lucha desde 2011. El empuje militante para la formación de partidos propios de la movilización y que representaran a la cada vez más masiva crítica política, devino en la acelerada construcción de organizaciones, la más exitosa sin duda RD, y que alcanza un momento de maduración entre 2016 y 2017 con la creación del Frente Amplio y su más que satisfactorio debut electoral con la conquista de 20 diputados y un senador, así como de un quinto del electorado presidencial. Las masivas votaciones obtenidas en sectores urbanos populares, como en las zonas pobres de Santiago o ciudades portuarias como San Antonio y Valparaíso, junto a las que se obtuvieron en los barrios de clases medias de esos lugares, dieron la apariencia entonces de que dicha alianza social había construido cabeza política propia (El Desconcierto, 2017).

Pero esta imagen escondía dos problemas que se harían notorios dos años más tarde. Primero, que mientras más se masificaba la impugnación al neoliberalismo hacia lo largo y ancho del país, menos tenían control los partidos de la nueva izquierda del proceso. En segundo lugar, que dichos partidos tenían cada vez más interés –y eso significa priorizar– en la lucha parlamentaria y menos en la lucha social, a la que veían a veces como su resorte pasado y no como fundamento presente. El movimiento feminista, con su muy activo rechazo frontal a la tradición masculina y patriarcal de los partidos de izquierda, dibujó bastante esta distancia. Cuando se denunciaron las prácticas de abusos y violencia machista que se daban en la nueva izquierda, esta respondió ambiguamente, a veces reformándose, otras protegiéndose. Mostraba como la crítica de masas a la política obligaba a los partidos o a ser totalmente coherentes con esa crítica o a verse amenazados de ser barridos por la misma. Aunque los resultados a la larga son de distinta valoración, y la mayoría de los partidos se reformaron en clave feminista, los conflictos dieron cuenta de una distancia entre movimientos y organizaciones políticas que ya era problemática.

La distancia que referimos no era meramente de estrategias e ideológica, sobre el lugar de las luchas sociales en la práctica política formal de las izquierdas. Como suele suceder en estos casos, más allá de las ideas, hay énfasis materiales, prioridades en los esfuerzos. Lo que impuso el salto a la política formal dado por las organizaciones de la nueva izquierda de la alianza social de 2011, fue una movilización enorme de recursos para las demandantes campañas electorales. Un enorme caudal de militantes, que contaban con alrededor de una década de experiencia en luchas sociales y politización de las mismas, de las que además habían surgido como producto novedoso del ciclo, debió asumir tareas electorales, de mantención burocrática de las organizaciones, de relaciones políticas con otros partidos, y, después, de administración de las bancadas, municipios y diputaciones obtenidas en el bienio 2016-2017. De esta forma, los movimientos sociales se fueron quedando vacíos de los especialistas que habían dinamizado su acción política de masas impugnatoria del neoliberalismo, justo cuando dicha línea de ataque por años sostenida comenzaba a mostrar su capacidad desestabilizadora de los consensos del régimen. En el momento de mayor éxito de la estrategia de la alianza de 2011, a saber, la lucha social como motor de cambios políticos, la movilización fue entendida como una normalidad de origen estructural que siempre estaría allí para darle fuelle a la política de izquierdas, y que, por ende, debía ser apoyada, pero no dirigida como delta de crisis. Las masas en lucha empezaron a ser vistas como un público que apoyaba o rechazaba la política, pero nunca la decidía o determinaba. Del descubrimiento de la política en la lucha social se había pasado un extremo opuesto, es decir, el abandono de la lucha social por el descubrimiento de la inmensa demanda de la política formal.

Los elevados salarios en el parlamento, así como los enormes recursos que los partidos de la nueva izquierda gozan desde 2017, contrastaban con el empeoramiento de condiciones de vida de las bases militantes y activistas de la nueva izquierda radical. La dispar suerte al egresar de la educación superior o secundaria de la generación de 2011 agudizaba el contraste en los círculos más activistas, tanto en la selección de cuadros como en su notoriedad política. La distancia comenzó a ser también entre quienes eran víctimas de la promesa incumplida de la movilidad social y quienes no necesitaban dicha movilidad sino como frustración traducible en votos. Sectores populares se vieron lejanos a una política que se hacía en su nombre, pero sin su presencia. El despotismo populista se tomó, a pesar de honestos esfuerzos por impedirlo, la identidad de la franja militante de la nueva izquierda. La escasa institucionalidad de los partidos y de las bancadas, ha facilitado la estatización parlamentaria, y bajó la urgencia de aquello que estaba en el origen del ciclo de protestas: la posibilidad de dislocar la Transición a punta de luchas sociales que la impongan. La alianza social de 2011 comenzó a trisarse, entonces, producto de la distancia entre quienes veían como crecía por la base el malestar social, y quienes ya no veían en él una materia prima para la acción, sino un argumento para la administración izquierdista del mismo desde la política. Aunque mantenía la identificación ideológica con el malestar de masas, dejó de habitarlo. La parte más politizada de la nueva izquierda no notó –y muchos aún no lo hacen– que el ciclo de protestas iniciado en 2011 tenía esa actitud propiamente proletaria de desconfianza hacia la política. Aquella

pendía como una amenaza de destitución sobre sus cabezas si es que no decidían ser su punta política, leal, parcializada a su favor. Con la revuelta de octubre de 2019, y con la forma en que la política intentó procesarla, la distancia se volvió insalvable, por lo menos en el mediano plazo. Ya no había una promesa de una nueva y joven izquierda situada en los que luchan contra el régimen, sino una situada en –y a veces identificada con– el régimen, desde donde buscaba “resolver el problema” de la lucha social.

V

El recuerdo es difuso después de la espectacularidad de octubre 2019, pero poco tiempo antes, un par de meses, el movimiento de profesores fue dramáticamente derrotado por el Gobierno. La nueva izquierda en el parlamento apoyó a uno de los movimientos de trabajadores emblemáticos de la alianza social de 2011, pero no tomó su lucha como un asunto de vida o muerte. La derrota del paro docente fue uno de muchos desprecios desde la política, a pesar de los “nuevos políticos” que la llenaban. Daba la impresión de que no quedaba más camino que la rebelión de tonos destituyentes. En los últimos días del paro, cuando la derrota ya era evidente, en distintos puntos del país los profesores levantaron barricadas y se enfrentaron a la policía. Esos rasgos proletarios no eran propios de su tradición ni de su estatus profesional, pero, como se vio a los pocos meses, si lo eran de un amplio sector de las clases trabajadoras asqueadas del modelo (Matamoras, 2019). Las explicaciones de la revuelta y violencia del denominado “estallido social” son variadas y no están del todo elaboradas, pero sin duda el distanciamiento entre las organizaciones sociales en lucha y los partidos de la nueva izquierda (y también de la vieja) es una que no puede descartarse. Allí yace la explicación de la masificación de la crítica al régimen fundado en la Transición, así como de su negativa a ser procesados por la política, su inorganicidad defendida como virtud en las mayorías movilizadas en la revuelta.

La humillación de los profesores, la criminalización insoportable de la juventud popular a través de Aula Segura, el violento rechazo al feminismo, y otros manotazos autoritarios del gobierno desde 2018, fueron arrinconando a las franjas organizadas de la alianza social de 2011. Desencantados muchos por segunda vez con la política, comienzan a observar la revuelta, la violencia, como salida legítima, por lo menos digna. Octubre fue eso y mucho más. Fue el éxito de la masificación politizada del ciclo de protestas sostenido desde 2011 contra el orden del neoliberalismo y la Transición. También mostró cuán desanclada estaba la política, incluyendo a la nueva izquierda, de la parte más dispuesta al enfrentamiento de la sociedad, la parte más proletarizada. Si en 2011 el lugar de los principales cuadros de la alianza social de jóvenes de sectores medios y de clases trabajadoras estaba en las luchas directas, esta vez estuvo alejado de las mismas. Es interesante el dato notado por el historiador Nicolás Acevedo, que la de 2019 sería la primera revuelta de la historia de Chile que termina sin ningún dirigente importante de la izquierda detenido o herido. Su ausencia “a la antigua”, impidiendo las balas de Carabineros, se hizo dramáticamente notoria a la larga (Acevedo, 2020).

La historia de 2019, vista con la perspectiva puesta a ras de suelo, deberá contarse desde 2011, y puesta allí, de 2001, 2005, 2006, y un sinfín de momentos en que la porfía de la lucha subalterna salió a declarar que la normalidad era insoportable. También puede tener utilidad mirar desde los que se dirimen entre el desahogo de la revuelta y la desesperanza del malestar constante, y desde marzo de 2020, agudizado por la excepción y el empobrecimiento que enmarcan la pandemia. Aquella utilidad es poder comprender qué produjo a la nueva izquierda, como se construyó un movimiento a la vez de protesta tanto como de acción política real. En el fondo y a decir de Benjamin, cuál es “el nervio de su mejor energía”.

Referencias

- Acevedo, N. (2020). Cien años de Presos Políticos en Chile: Desde los subversivos de 1920 a la actual Revuelta. *ROSA*, 2, 126-141.
- Bello Público, R. (2019). *María Música, ícono del Movimiento Estudiantil: “Desde chica se me puso la conciencia revolucionaria”*. Recuperado 17 de septiembre de 2020, de <https://www.revistabellopublico.cl/index.php/rbp-interviu/entrevistas/192-maria-musica-icone-del-movimiento-estudiantil>.
- El Desconcierto. (2017, noviembre 20). Desentrañando el 20%: Frente Amplio obtuvo importante votación en comunas populares de Santiago. Recuperado 17 de septiembre de 2020, de *El Desconcierto* website: <https://www.eldesconcierto.cl/2017/11/20/desentrañando-el-20-frente-amplio-obtuvo-importante-votacion-en-comunas-populares-de-santiago/>
- Emol. (2011). *Gobierno y habitantes de Magallanes sellan acuerdo que pone fin al conflicto del gas*. Recuperado de <https://www.emol.com/noticias/nacional/2011/01/18/459162/gobierno-y-habitantes-de-magallanes-sellan-acuerdo-que-pone-fin-al-conflicto-del-gas.html>
- Matamoras, C. (2019). Para un análisis del paro docente. Notas en perspectiva histórica. Recuperado 17 de septiembre de 2020, de *ROSA* website: <http://www.revistarosa.cl/2019/08/06/borrador-paro-docente-perspectiva-historica/>
- Mostrador, E. (2019, abril 22). No más deuda por estudiar. Recuperado 17 de septiembre de 2020, de *El Mostrador* website: <https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2019/04/22/no-mas-deuda-por-estudiar/>
- Olmedo, C. (2019). Feminismo en Chile: Una crítica sistémica desde el Sur. *ROSA*, 1, 140-160. Recuperado de <http://www.revistarosa.cl/wp-content/uploads/2020/04/ROSA-1.pdf>
- Tarrow, S. G. (2004). *Power in movement. El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*.
- Thielemann, L. (2011). Sobre las protestas contra HidroAysén y su masividad. Recuperado 17 de septiembre de 2020, de *Revista RedSeca* website: <http://www.redseca.cl/sobre-las-protestas-contrahidroaysen-y-su-masividad/>
- Thielemann, L., & Delgado, P. (2016). Desprofesionalización y proletarización en la escuela: Aproximaciones a la nueva conflictividad docente. *Cuadernos de Coyuntura*, 12, 14-22.